

Cómo medir la informalidad en los asentamientos de viviendas ocupadas: ¿Para qué preocuparse?

© Julio Calderon

Los residentes de este asentamiento informal en el distrito de San Juan de Lurigancho, en las afueras de Lima, Perú, poseen títulos de propiedad pero no tienen acceso a servicio de alcantarillado.

Martim O. Smolka and Ciro Biderman

Medir la informalidad en la vivienda es crucial para diseñar y evaluar una política efectiva. Este artículo examina las definiciones operativas de informalidad de la vivienda como medida de las deficiencias físicas y la falta de conformidad con las normas urbanas establecidas asociada (véase Biderman, Smolka y Sant'Anna 2008). Se analizan en detalle los dos primeros de los siguientes cuatro indicadores de informalidad: seguridad de tenencia (propiedad); acceso a los servicios públicos (agua potable y sistemas de alcantarillado); conformidad con las normas y reglamentos urbanos (tamaño de parcela, ancho de calles y espacio público); y la calidad física de la vivienda (materiales de construcción).

Los indicadores de informalidad existentes varían de forma considerable, lo que dificulta la preparación de diagnósticos fiables o la evaluación del desempeño de la política. La magnitud percibida de la informalidad sería bastante reducida si se midiera como porcentaje de los núcleos familiares que no tienen acceso a electricidad o al uso de materiales de construcción no permanentes (indicadores predominantes utilizados en el pasado),

pero sería elevada si el indicador empleado fuera la falta de conexión a una red de alcantarillado compartida. Asimismo, si el indicador indirecto se midiera en función de la falta de conformidad con las normas y reglamentos urbanos, no estaría limitado a situaciones de bajos ingresos, sino que incluiría además los edificios ilegales o irregulares de núcleos familiares con alto nivel de ingresos o las viviendas en las que se utiliza material prohibido como la pintura con plomo.

Incluso dentro de un indicador indirecto, las medidas pueden variar de forma considerable. Por ejemplo, los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) de Buenos Aires indican que el porcentaje de núcleos familiares sin seguridad de tenencia oscila entre el 1,37 por ciento, si se define como núcleos familiares que no son propietarios del suelo que ocupan, y el 10,19 por ciento, si se define como la ausencia de un título o un documento legal que demuestre la seguridad de tenencia.

Se encuentran discrepancias similares para el acceso a los servicios de alcantarillado, que se puede definir estrictamente como la falta de conexión a la red pública o, de forma más general, como la falta de conexión a la red pública o a una fosa séptica. De acuerdo con la

Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) de Costa Rica de 2006, el 71 por ciento de los núcleos familiares de Costa Rica no tenía acceso a la red pública de alcantarillado, pero el 67 por ciento tenía acceso a una fosa séptica. Por tanto, la medida cambiaría del 71 por ciento al 4 por ciento dependiendo de la definición. En términos absolutos, este resultado es más drástico cuando se comparan países en vez de zonas urbanas, debido a las mayores discrepancias en el acceso a servicios e infraestructuras de las zonas urbanas frente a las rurales. Por ejemplo, los porcentajes para definiciones rigurosas versus generales en varias ciudades son del 1 y el 3 por ciento para Bogotá; del 5 y el 10 por ciento en México DF; y del 13 y el 16 por ciento en Lima, respectivamente.

Evaluación de las percepciones de informalidad

Debido a estos problemas con los indicadores indirectos, quienes están involucrados con la informalidad a menudo no están informados sobre las medidas básicas (niveles y cambios), por lo que posiblemente no las tengan en cuenta o las interpreten incorrectamente. Además, el uso atento de los datos existentes puede poner en evidencia las deficiencias de la sabiduría convencional sobre la informalidad y las políticas adecuadas para manejarla. Nuestro estudio pretende medir las percepciones de funcionarios públicos, profesionales, académicos y otros expertos sobre la naturaleza, magnitud y tendencias de la informalidad, y además evaluar las implicaciones de estas percepciones para el diseño y evaluación de políticas públicas.

Para evaluar las percepciones y el conocimiento de un segmento de expertos con respecto a los indicadores alternativos, preparamos una encuesta que se envió a colegas que trabajan en cuestiones de política del suelo en 18 países de América Latina y el Caribe (ver Cuadro 1). Los resultados indican una confusión considerable en torno al fenómeno de la informalidad en la vivienda. Más del 52 por ciento de los encuestados no pudo proporcionar estadísticas sobre informalidad con facilidad. Aunque el cuestionario indicaba que dejar

estos campos en blanco se interpretaría como falta de familiaridad o de comodidad con los datos, muchos encuestados rellenaron todas las demás secciones del mismo con excepción de las que solicitaban una evaluación cuantitativa. Por otro lado, las respuestas múltiples, entre las cuales debían elegir una, variaban en intervalos del 5 por ciento (p. ej., del 10 al 15 por ciento) por lo que los encuestados tenían algo de margen para responder.

Para cada indicador indirecto también se pedía a los encuestados que eligieran entre definiciones alternativas y citar la fuente de información y el año de referencia. Con el fin de evaluar la calidad de estas percepciones, también se recopiló de los sitios web del departamento nacional de estadística la información más reciente disponible por país y ciudad que se correspondiera lo más exactamente posible con la definición de cada indicador. Los porcentajes obtenidos se toman como “valores de referencia” que varían según la definición, el indicador y la región.

Nos centramos en tres indicadores (ausencia de tenencia o tenencia insegura, falta de acceso al agua potable, falta de acceso al servicio de alcantarillado) para los países y las ciudades donde teníamos al menos cinco encuestados. A pesar de las limitaciones de los datos, pudimos establecer 504 correspondencias en observaciones de la encuesta con estos valores de referencia (ver Tabla 1). Sólo el 22 por ciento de los encuestados pudo establecer la correspondencia con las estadísticas para estos tres factores en el mismo intervalo que la fuente que produjo los valores de referencia. El porcentaje de sobreestimaciones puede ser incluso más elevado del indicado, ya que muchos encuestados proporcionaron fechas de referencia más recientes que las de los valores de referencia (tres años en promedio).

Las Figuras 1 y 2 muestran que las sobreestimaciones para seguridad de tenencia por país y ciudad eran uniformemente más altas que los valores de referencia si se comparan con los resultados para acceso al servicio de alcantarillado. El nivel inferior de sobreestimaciones para el acceso al alcantarillado y al agua que para

Tabla 1. Comparación de estimaciones de los encuestados con los datos públicos oficiales (valores de referencia)

Estimación	Tenencia		Agua		Alcantarillado		Total	
	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje
Sobrestimación	111	80	73	40	68	37	252	50
Subestimación	11	8	55	30	77	42	143	28
Correspondencia	16	12	54	30	39	21	109	22
Total	138	100	182	100	184	100	504	100

Fuente: Institutos Nacionales de Estadística, Brasil; Encuesta de Lincoln Institute sobre percepciones de informalidad

seguridad de tenencia de la Tabla 1 puede estar relacionado con las definiciones más sencillas y con una mayor evidencia de mejoras en el abastecimiento de agua y el servicio de alcantarillado que en la seguridad de tenencia. Visto de otra forma, por cada percepción del empeoramiento de las condiciones de tenencia había sólo 1,2 percepciones de mejora, mientras que los índices para acceso al agua y a los servicios de alcantarillado eran de 9,1 y 3,1 respectivamente. Más importante que el sesgo de sobreestimación es el bajo nivel de precisión de las respuestas: el 30 por ciento o

Figura 1. Comparación de los resultados de la encuesta con los valores de referencia sobre el acceso a la seguridad de tenencia

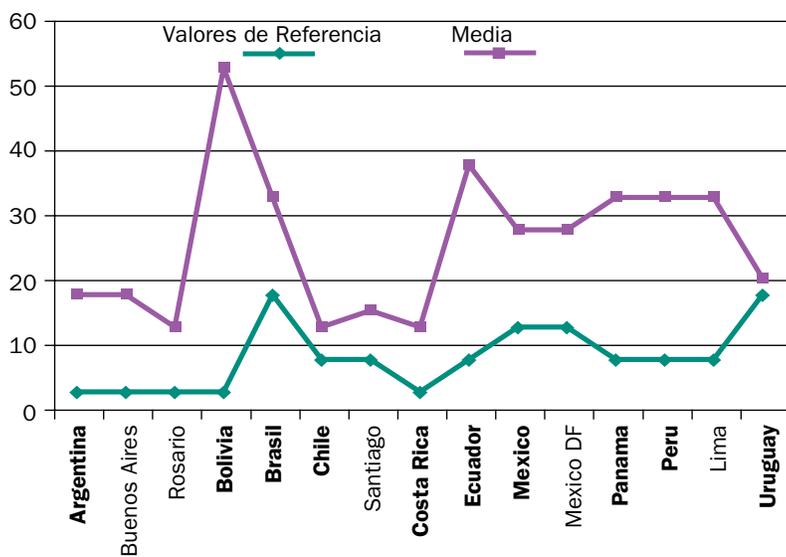
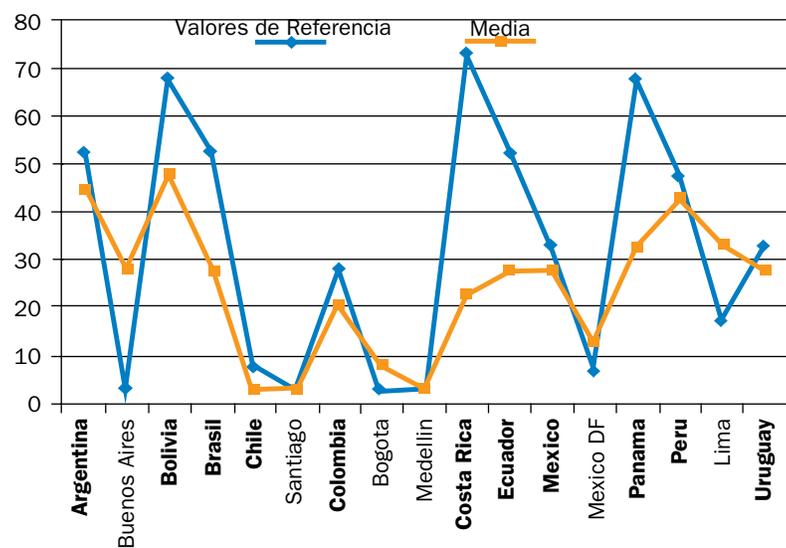


Figura 2. Comparación de los resultados de la encuesta con los valores de referencia sobre el acceso al servicio de alcantarillado



menos para los tres factores. Es decir, un número considerable de encuestados erró el valor de referencia, incluso en el indicador de acceso al agua y a los sistemas de alcantarillado.

Además de la falta de precisión en sus estimaciones, los encuestados demostraron una amplia varianza en sus respuestas individuales al compararlas con los valores de referencia. Esto es sorprendente, considerando que cabría esperar un cierto grado de convergencia para los índices que deben reflejar información pública. La coincidencia entre encuestados sólo se constató en el 20 al 40 por ciento de éstos, dependiendo de la definición considerada para cada indicador.

Esta aparente falta de consenso se refleja también en las evaluaciones de encuestados sobre el indicador más relevante para la informalidad de vivienda en su propio país o ciudad. Se pidió a los encuestados que clasificaran cinco indicadores: seguridad de tenencia, acceso al agua potable segura, acceso al servicio de alcantarillado, conformidad con la normativa urbanística y condiciones de construcción, en una escala del 1 (menor) al 5 (mayor) en función de su relevancia. Si los encuestados preferían un indicador de forma consistente, un elevado porcentaje de respuestas tendría una calificación de 5 ó 4; si el indicador se rechazaba de forma sistemática, el mayor porcentaje se encontraría en las calificaciones de 1 ó 2. El resultado real fue una distribución casi neutral de las preferencias, donde tres de los cinco indicadores (agua, alcantarillado y construcción) presentaban una distribución en forma de U casi invertida, concentrada en el intervalo medio de clasificación 3 (ver Figura 3).

Este resultado no cambió de forma significativa en función de países o ciudades. La seguridad de tenencia fue más controvertida, al mostrar una distribución más amplia con calificaciones de menor a mayor en una forma de U derecha. La conformidad con la normativa fue el factor rechazado de manera más uniforme, tal y como se muestra en la pendiente descendente de calificaciones mayores a menores. Sin embargo, más encuestados calificaron la normativa, por sobre el servicio de alcantarillado o el abastecimiento de agua, como su alternativa preferida (calificación 5). Esta falta de consenso sobre el indicador indirecto relevante afecta al grado de acuerdo sobre la forma de abordar el problema, y menoscaba los intentos de comparar los niveles de informalidad y el desempeño de las políticas en los distintos países o ciudades.

También se pidió a los encuestados que proporcionaran información sobre su valuación de los cinco indicadores a lo largo del tiempo. Quienes respondieron la pregunta afirmaron de manera

abrumadora que las condiciones están mejorando, aunque disentían de nuevo sobre la velocidad relativa del cambio para cada factor. Por cada percepción de un índice de empeoramiento, hubo más de dos que sugirieron una mejora en todos los indicadores, y este resultado se sustenta en los distintos países y ciudades. Estas cifras contrastan con la retórica general en la región de “empeoramiento de las condiciones de los asentamientos”, “la década perdida de inversión en infraestructuras” y otras afirmaciones similares.

El peligro de basarse en un solo indicador

Sería un error precipitarse a sacar la conclusión fácil de que si todos los indicadores indirectos están mejorando, eso implica que debe existir una fuerte correlación entre ellos. Esa visión es implícita, por ejemplo, en la tesis de que las mejoras en la seguridad de tenencia se trasladarían de manera inexorable a otras mejoras (de Soto 2000). En la Tabla 2 se ilustran diversos índices de cambio en la seguridad de tenencia y acceso a los sistemas de alcantarillado en una muestra de 3.500 municipios brasileños desde 1991 a 2000, clasificados en quintiles. El quintil 1 incluye los municipios que más han reducido el porcentaje de núcleos familiares que carecen de tenencia o de acceso a servicios, mientras que el quintil 5 representa a los municipios con los peores indicadores de rendimiento en ambas medidas. Al cruzar los datos de ambos conjuntos de casos, vemos que existen 106 municipios donde se ha producido la mayor reducción del número de núcleos familiares sin tenencia (fila 1), pero también muestran el peor desempeño en cuanto a acceso al servicio de alcantarillado (columna 5).

Si no existiera correlación alguna entre los cambios en estos dos indicadores, el número de casos esperado en cada celda habría sido de 140 (3.500 municipios divididos de forma idéntica entre 25 celdas). Las correlaciones exactas de las mejoras en estos dos indicadores producirían celdas diagonales con 700 municipios en cada una (3.500 divididos en 5 celdas), y todas las demás celdas serían igual a cero. No obstante, al observar el número de municipios en la celda superior derecha (106) y en la celda inferior izquierda (117), vemos que en muchos municipios una mejora relativamente alta en el número de títulos de propiedad estuvo acompañada de un deterioro relativamente alto en el acceso al servicio de alcantarillado y viceversa. El coeficiente de correlación general entre el índice de cambio en la seguridad de tenencia y en el acceso al servicio de alcantarillado entre municipios no es superior al 5 por ciento.

Este análisis ilustra los peligros de utilizar un

FIGURA 3
Clasificación de cinco indicadores de informalidad de vivienda

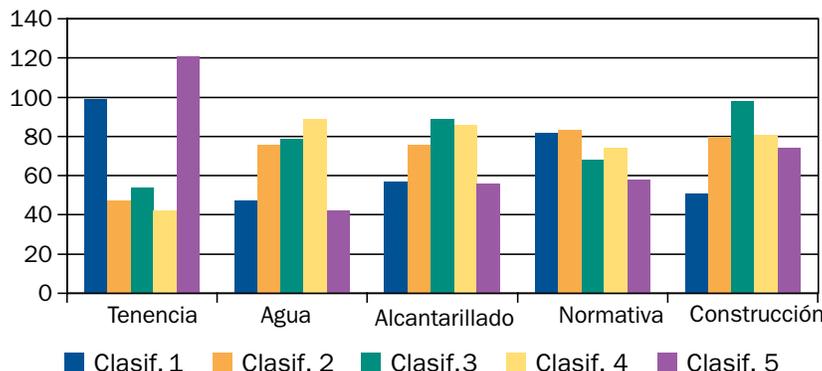


Tabla 2. Distribución de 3.500 municipios brasileños por índice de cambio en la tenencia y el acceso al servicio de alcantarillado, de 1991 a 2000

		Quintil de índice de cambio				
		1 (Menor)	2	3	4	5 (Mayor)
		Servicio de alcantarillado				
Tenencia	1	172	166	134	122	106
	2	164	140	140	125	131
	3	123	148	147	146	136
	4	124	131	141	162	142
	5	117	115	138	145	185

Fuente: Censo de Brasil. 1991; 2000. Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE)

indicador único para la informalidad. El problema no es puramente estadístico, puesto que las mejoras en un indicador pueden de hecho inducir al deterioro o a la mejora de otra. Corzo y Riofrío (2006) aseveran que la concesión de un gran número de títulos de propiedad individuales en parcelas en Perú significó que las familias ya no necesitaban ocupar sus terrenos a fin de convertirse en propietarios de ellos. En consecuencia, no tenían que tomar parte de ninguna acción colectiva (ni establecer nexos con la comunidad), lo que suele ser fundamental para la demanda y la provisión de servicios. En Perú, este fenómeno ha dado lugar al llamado síndrome de “terrenos turísticos” de beneficiarios ausentes de un terreno con título de propiedad, que a su vez es responsable en gran medida de la proliferación hacia zonas sin servicios, además de la generación de terrenos vacíos dentro de un asentamiento que recibió los títulos.

Implicaciones engañosas de los indicadores compuestos

En una iniciativa encomiable para ofrecer una estimación aproximada del número de asentamientos informales en 316 países de todo el mundo, UN-Habitat (2003) desarrolló una solución ingeniosa para la falta de

Tabla 3. Acceso a tenencia o servicio de alcantarillado en municipios brasileños de 100.000 habitantes o más

Tipo	Porcentaje	
	1991	2000
Con título de propiedad, acceso a servicios, normal (no asentamientos informales)	69.4	75.2
Núcleos familiares en asentamientos informales	30.6	24.8
Sin título de propiedad, con acceso a servicios	5.9	8.5
Con título de propiedad, sin acceso a servicios	19.4	14.0
Sin título de propiedad, sin acceso a servicios	5.4	2.4

Fuente: Censo de Brasil. 1991; 2000. Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE)

consenso sobre los indicadores indirectos: un índice compuesto de atributos de informalidad. Se considera como “núcleo familiar en asentamiento informal” a cualquier grupo de personas que viven bajo el mismo techo y carecen de lo siguiente:

- acceso a agua en condiciones mejoradas: un mínimo de 20 litros/persona/día que cueste menos del 10 por ciento de los ingresos familiares y requiera menos de 1 hora de trabajo al día; o bien
- acceso a instalaciones de saneamiento mejoradas: un sistema de eliminación de aguas servidas compartido con un número razonable de personas; o bien
- espacio habitable suficiente: menos de tres personas por habitación; o bien
- calidad estructural y durabilidad de las viviendas: vivienda construida en un lugar no peligroso y que proteja a sus habitantes de condiciones climáticas extremas; o
- seguridad de tenencia: protección efectiva del Estado contra desalojos ilegales arbitrarios.

Esta iniciativa para reunir datos produjo una estimación aproximada del número de asentamientos informales a nivel mundial. La reiterada estimación de mil millones de habitantes de asentamientos informales, la tendencia esperable, y su distribución regional atrajeron una atención considerable de los medios de comunicación (ver Davis 2006). Sin embargo, la definición admite variaciones, puesto que el acceso a los servicios o la falta de tenencia pueden ser definidos de forma diferente en distintos países.

Surgen serias carencias cuando, aparte de su importancia política general, se examina la informalidad en ciudades o países individuales con fines de evaluación de políticas y/o de comparaciones en el tiempo y el espacio. Pueden producirse interpretaciones erróneas, como en este ejemplo de dos áreas (A y B) compuestas por 1.000 núcleos familiares cada una. Los núcleos

familiares de la zona A carecen únicamente de seguridad de tenencia, mientras que los de la zona B carecen de los cinco indicadores indirectos. La zona B se formó al mismo tiempo que se resolvieron los problemas de tenencia en la zona A por medio de un programa específico de concesión de títulos de propiedad. En principio, el grado de informalidad no ha cambiado: 1.000 núcleos familiares de la zona A han dejado de considerarse asentamientos informales, mientras que ha surgido un nuevo grupo de 1.000 núcleos familiares en la zona B como asentamiento informal. Sin embargo, en conjunto, las condiciones de los asentamientos informales han empeorado porque los de la zona B carecen de los cinco indicadores, mientras que en la zona A sólo carecían de cuatro.

En la Tabla 3 se presentan datos de tenencia y acceso al servicio de alcantarillado en las ciudades brasileñas de más de 100.000 habitantes y se aclaran las desventajas de basarse en indicadores compuestos. En este grupo de ciudades, utilizando una definición similar a la de la ONU, el número de núcleos familiares que viven en asentamientos informales disminuyó sólo un 6 por ciento, de aproximadamente el 31 al 25 por ciento. Utilizando la misma fuente de datos para el país en conjunto (no se muestra en la tabla), la proporción de núcleos familiares que vive en asentamientos informales disminuyó 13,6 puntos, del 48,3 al 34,7 por ciento. Las últimas cifras son compatibles con las de la ONU (45,0 y 36,6 por ciento en 1990 y 2001, respectivamente). La mayor reducción de los asentamientos informales fue en los grupos con títulos de propiedad y sin servicios, que disminuyó del 19,4 al 14 por ciento.

El grupo que carece de títulos de propiedad pero con acceso a servicios aumentó su proporción del 5,9 al 8,5 por ciento en la década de 1990 (igual que pasó con este grupo a nivel del país, aumentando del 3,6 al 6,5 por ciento). Esta dicotomía ilustra que la definición de asentamientos informales puede conducir a diferentes percepciones de la dinámica del problema. Si bien el “peor” tipo de vivienda (sin título de propiedad y sin servicios) está disminuyendo de hecho (del 5,4 al 2,4 por ciento), determinadas categorías de grupos informales están aumentando. Al observar el problema en varias dimensiones, observamos cambios que no se pueden percibir si se utiliza una definición de dicotomía simplista.

Con fines de evaluación de políticas, vemos que una forma más oportunista de mostrar resultados rápidos con un gasto relativamente bajo sería conceder títulos a los núcleos familiares que disfrutaban de acceso a servicios, reduciendo de esta manera el número de asentamientos

en un 8,5 por ciento en 2000. Si desplazamos la atención a los núcleos familiares en las peores condiciones (sin título de propiedad y sin acceso a servicios) entonces el porcentaje de asentamientos informales en el año 2000 habría mejorado sólo en un 2,4 por ciento. Ambos grupos con título de propiedad tenían aproximadamente el mismo porcentaje en 1991 (5,9 y 5,4 por ciento), pero aparentemente en Brasil se eligió el programa más caro para garantizar el abastecimiento de servicios independientemente de la existencia o no de títulos de propiedad.

Resumen e implicaciones

La encuesta muestra que un número significativo de expertos en política del suelo de América Latina no se pone de acuerdo en la forma correcta de medir el fenómeno de la informalidad y su magnitud, e incluso no está familiarizado con las estadísticas oficiales sobre el problema.

Una explicación posible de la aparente falta de conocimiento o de acceso a información cuantitativa es que la mayoría de las políticas sobre vivienda se centran en mitigar problemas específicos a nivel de proyecto, en lugar de crear iniciativas de carácter preventivo que afecten a todo el proceso de informalidad.

Evidentemente los indicadores son menos importantes en las anteriores intervenciones porque un proyecto se considera exitoso cuando se evalúa según su diseño o modelo original (p. ej., número de obras públicas realizadas, número de familias asistidas). El efecto posible de un proyecto local sobre la informalidad en la vivienda en general es apenas motivo de preocupación. ¿Por qué iban los creadores de las políticas a preocuparse de las estadísticas sobre informalidad a nivel del país o ciudad cuando su objetivo primordial e inmediato es obtener resultados tangibles para sus propios proyectos?

Otra explicación es que muchos planificadores urbanos profesionales son arquitectos sin formación en cuanto a métodos cuantitativos de análisis. Este conocimiento e interés limitado respecto de los indicadores indirectos se debe a la falta de tratamiento cuantitativo de los problemas relacionados con la vivienda tanto a nivel de investigación académica como en los documentos públicos oficiales.

Sin embargo, medir la seguridad de tenencia y el acceso a los servicios es importante a la luz de las actuales políticas de regularización. El caso de Brasil ilustra cómo expertos mal informados pueden influir en las prioridades de las políticas. Claramente las condiciones han mejorado en lo relativo al acceso al servicio de alcantarillado, tal como se constata en las

respuestas de los encuestados, aunque éstas subestiman de forma abrumadora la situación y sugerían que era mejor que el nivel medido por los datos de referencia oficiales. En contraste, las sobreestimaciones sobre la seguridad de tenencia indican la percepción opuesta, con consecuencias potencialmente negativas para las políticas de vivienda. Podría alegarse que si la concesión de títulos está quedando rezagada con respecto a la provisión de servicios, entonces debería realizarse un esfuerzo mayor en la concesión de títulos de propiedad.

Las respuestas confusas y contradictorias de los expertos latinoamericanos que participaron en nuestra encuesta nos alertan a políticas potencialmente equivocadas que podrían fomentarse por percepciones erróneas e indicadores débiles. ¿Es posible que la reciente experiencia de la provisión de servicios, incluso sin concesión de títulos de propiedad, junto con un reconocimiento masivo del derechos a un título de propiedad, propicie una reducción aún mayor en el número de viviendas con título pero sin servicios?, o ¿dará lugar a una nueva ola de ocupaciones informales y a una mayor expansión del grupo de núcleos familiares carentes de títulos de propiedad? Faltaría la respuesta de funcionarios responsables de la elaboración de políticas mejor informados... 

► SOBRE LOS AUTORES

MARTIM O. SMOLKA es Senior Fellow y director del Programa para sobre América Latina y el Caribe del Lincoln Institute. Contacto: mamolka@lincolninst.edu

CIRO BIDERMAN es Visiting Fellow del Lincoln Institute of Land Policy e investigador adjunto al Departamento de Planificación y Estudios Urbanísticos del Instituto de Tecnología de Massachusetts. Asimismo, es profesor asociado en la Fundación Getulio Vargas e investigador asociado en el Centro de Estudio de las Políticas y Economía del Sector Público (CEPESP/FGV) de São Paulo, Brasil (en licencia). Contacto: biderman@mit.edu

► REFERENCIAS

Biderman, Ciro, Martim O. Smolka y Anna Sant'Anna. 2008. Urban housing informality: Does building and land use regulation matter? *Land Lines*: 20(3): 14–19.

Corzo, Ramiro y Gustavo Riofrio. 2006. *Formalización de la propiedad y mejoramientos de barrios: bien legal, bien informal*. Lima: Desco, Programa Urbano.

De Soto, Hernando. 2000. *The mystery of capital: Why capitalism triumphs in the West and fails everywhere?* New York: Basic Books.

UN-Habitat. 2003. *Slums of the world: The face of urban poverty in the new millennium?* <http://www.unhabitat.org/pmss/>

Encuesta a expertos de América Latina

Entre el 23 de enero y el 13 de febrero de 2009, el Lincoln Institute envió una encuesta por correo electrónico a 6.048 personas de América Latina relacionadas con temas de políticas del suelo que integran la lista de correo del Instituto; se recibieron 912 encuestas completadas. No se pidió a los encuestados que se identificaran. La lista del Lincoln Institute incluye “líderes de pensamiento” en temas de planificación urbana, incluidos profesores, investigadores, profesionales asociados a las políticas de suelo (arquitectos, planificadores urbanos, economistas) y funcionarios públicos de grado medio y alto. Más del 70 por ciento indicó que su involucramiento profesional con los asentamientos informales era principal o indirecta, pero regular. Además, un 36 por ciento afirmó trabajar directamente en temas de regularización o programas de vivienda. Se consideraba que los encuestados representan profesionales con calificación superior a la media que trabajan en temas de políticas públicas relacionadas con asentamientos informales.

Los datos de la encuesta se analizaron por unidades geográficas (países o ciudades) que tenían un mínimo de 10 u 8 encuestados, respectivamente, quienes habían completado al menos un campo de valoración. Se obtuvieron las siguientes 15 unidades geográficas: 9 países (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Perú y Uruguay) y 6 ciudades (Buenos Aires, Santiago, Bogotá, Medellín, Ciudad de México y Lima). Asimismo, el análisis incluyó los países de Ecuador y Panamá y la ciudad de Rosario, en Argentina, todos los cuales ofrecían al menos cinco observaciones para las que había datos disponibles.